

# Entre la Legitimidad y la Violencia

MARCO PALACIOS, EDITORIAL NORMA, BOGOTÁ, 1995.

Entre la legitimidad y la violencia (Colombia 1875-1994) de Marco Palacios comienza con una reflexión sobre tres problemas axiales del país en el siglo XIX: primero, las incesantes guerras civiles; segundo, el impacto de éstas en el tambaleante Estado Nacional y tercero el consuetudinario aislamiento internacional de Colombia cuyos peligros sólo descubrimos a través de la traumática relación con los E.U. que se consuma con la pérdida de Panamá.

Desde esa zona de la memoria nacional inicia Palacios una verdadera travesía intelectual cuyos horizontes tienen límites bien precisos: copan la trayectoria secular de las dos más importantes constituciones de nuestra era republicana. El autor va introduciendo casi imperceptiblemente al lector en la laboriosa construcción de su rompecabezas que con mano diestra va llenando de etnias, de fronteras, de productos, de campos de batalla, de ríos y de ferrocarriles, de pueblos y ciudades... De grupos sociales diversos, campesinos, indígenas, artesanos, terratenientes, importadores, exportadores y

por supuesto de colores políticos. Se trata, pues, de un ambicioso esfuerzo de síntesis que integra en un mismo movimiento historia económica, social, política y cultural.

La tarea es desde luego exigente, pues tal y como se desprende del análisis, Colombia a fines del siglo XIX era un país de difícil caracterización: no tenía grandes centros urbanos o regionales y quizás por lo mismo las rivalidades eran constantes: era un país disgregado; no tenía conformaciones raciales fuertes, era esencialmente un país mestizo; no tenía estructuras agrarias bipolares, era un país de estratificaciones continuas. Era un país de territorios monopolizados, pero también de fronteras abiertas, lo cual no impedía que las luchas por el control del espacio y la apropiación de la tierra fueran factores visibles en las guerras, en las elecciones y partidistas y en las pujas por supremacías generalmente mal resueltas; era un país políticamente dominado por la dinámica bipartidista, pero con una enorme flexibilidad para las posiciones inter-

medias, llámense históricos, nacionalistas, republicanos o unionistas; era un país hegemónicamente católico, pero siguiendo las mismas tácticas del bipartidismo, se desenvolvía de acuerdo con la fórmula acuñada por Palacios de "una iglesia y muchos cleros"; era un país en donde la retórica proteccionista no era incompatible con un liberalismo dominante; era un país de guerras pero también de elecciones que, dicho sea de paso, causaban tantos muertos como las primeras.

En contraste con esa Colombia descuadrada del siglo XIX, en el siglo XX comienzan a perfilarse algunos ejes articuladores: en el campo socio-económico, es evidentemente la expansión cafetera, que a su vez alimenta los procesos de industrialización y urbanización, y cambia el mapa productivo del país, dando lugar a una duradera hegemonía regional; los polos de desarrollo, en términos de poder, riqueza y cultura -para utilizar la trinidad omnipresente en este texto- se desplazan inexorablemente del oriente al occidente y a los en-

claves petroleros y bananeros, cuya importancia más que económica era social y política, pues sirvieron de cuna a un movimiento obrero militante y a la agitación de nuevas ideas; social y políticamente, Colombia seguía siendo un país irremediabilmente disperso pero ya era también un país intercomunicado por mar, aire y tierra. Tres grandes focos fabriles, Medellín, Bogotá y Cali introducían una relativa coherencia a los múltiples apetitos locales y provinciales. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX las estructuras caciquiles y la liturgia electoral reemplazan a la guerra como mecanismo de relevo político y pese a los numerosos muertos que cotidianamente se producen en una especie de Colombia subterránea, aún no suficientemente explorada, se crea el cuasi-mito de la civilidad colombiana, atenuado por la certidumbre del fraude recurrente. La sociedad elitista y patriarcal del siglo XIX se diversifica con el reconocimiento y extensión de la ciudadanía política y social a nuevos sujetos: campesinos, obreros, indígenas, mujeres. Estas últimas a partir de los años treinta, y en muchos casos desde antes, empiezan a cambiar el paisaje de las fábricas, de la política, de los centros de formación superior, cada vez más numerosos, y a ponerse en condiciones de competir en Prestigio y profesionalismo en campos reservados antes a la condición masculina.

Cambió también el cuadro de las relaciones comerciales, Pues como lo argumenta Palacios, la pérdida de peso relativo

del café, de un 80% en los años cincuenta, a un 25% en los noventa, fue compensada con productos manufactureros y con productos del sector energético, que tienen compradores distintos a los llamados *suaves* colombianos. Producir y tener café dejó de ser un símbolo de prosperidad. Todo lo contrario, a mediados de los ochenta según nos lo enseña el autor, el ingreso anual de *Juan Valdez*, el típico campesino cafetero, es inferior al de un trabajador urbano con salario mínimo legal. En los noventa, Colombia ya no era un país ni cafetero ni campesino.

Con respecto a la Violencia, el autor se niega a verla como un corte histórico muy preciso y lo que hace más bien es ir dibujando a lo largo del siglo todo un cuadro de relaciones que la van haciendo casi predecible e inevitable: la vé expresarse en la superposición de movimientos colonizadores y rivalidades partidistas, desde la segunda mitad del siglo XIX; en el sectarismo secular fraguado al calor de elecciones y guerras civiles, con sus héroes y sus mitos; en la socialización de muchas regiones en la guerra de guerrillas, popularizada sobre todo durante la última fase de la Guerra del los Mil Días; en el fanatismo antiliberal, antiprottestante y antimason de algunos sectores del clero católico; y en el choque entre movilización (democratización) política y acción directa que caracteriza el periodo de la *república liberal* hasta el asesinato de Gaitán, entre otros. En igual sentido, los grandes trazos de la política macroeconómica de los cincuenta los ve simple-

mente como la confirmación de los que ya se insinuaban desde 1930 en adelante, en cuanto a manejo de precios del café, inversión, y limitada intervención estatal. La prosperidad económica acompañaba la Violencia, pero no se derivaba necesariamente de ella.

En los años cincuenta, Colombia vuelve a ser terriblemente decimonónica: fragmentada, y sobre todo hiperpoliticizada. En el momento en que Gaitán prometía la plena ciudadanía a los sujetos sociales emergentes, La Violencia irrumpe como fuerza contenida durante décadas y simultáneamente afirma líneas de larga duración en lo económico y pulveriza el panorama político-social. En sus expresiones espaciales la violencia es discontinua, descentrada y en sus expresiones cronológicas es disrítica, con temporalidades múltiples, sucesivas o superpuestas... Como resultado global del proceso o procesos, el tema de la ciudadanía es sustituido por el de la legitimidad, el de la incorporación por la resistencia y el de la reforma por la competencia caótica y desigual entre actores sociales y políticos, en ascenso unos, y al borde de desaparecer otros. Para los artesanos, por ejemplo, a quienes se venía decretando la muerte desde mediados del siglo pasado, el 9 de abril de 1948 fue quizás su último grito de desesperanza. No fueron los únicos o los más afectados.

Diez años más tarde también los partidos estaban desvertebrados, al igual que los obreros, los campesinos y las disidencias religiosas. Y en

cuanto a los intelectuales, estaban simplemente ausentes.

Prácticamente desde entonces, y como efecto derivado o transformado de la politización partidista del *orden público*, se ha hecho imposible reconstruir dos pilares fundamentales del Estado y de la seguridad ciudadana: la justicia y la policía. El contraste que define las dimensiones del problema lo plantea Palacios así: "mientras el poder judicial se mantiene en la etapa artesanal, la criminalidad avanza a la industrial". Escuadrones de la muerte, sicarios, bandas de "limpieza social", milicias urbanas, prosperan en el vacío de la autoridad estatal, en esa verdadera sinfonía del terror que ha vivido el país en las dos últimas décadas.

Desde entonces se vienen igualmente aplazando las reformas del ejército y de los servicios de inteligencia, cuya urgencia se imponía no tanto en función de la eficacia represiva sino de las garantías democráticas y en especial de la salvaguarda de los derechos humanos. Hubo oídos sordos y hasta cinismo frente a los reclamos ciudadanos en esos asuntos. El pasado parecía contar negativamente en los cálculos.

Un efecto perverso de los turbulentos años cincuenta en las mentes gobernantes fue que las élites percibieron que las altas dosis de violencia eran compatibles con elevados índices de prosperidad. Se fueron acostumbrando entonces a cultivar un cierto aire de indiferencia frente a los efectos de la violencia y hasta llegaron a considerarla funcional para

su reproducción. Se equivocaban. Toda violencia endémica tiende a morderse la cola. Es decir, ocasionales promotores o beneficiarios, terminan siendo sus propias víctimas.

Dentro de la misma perspectiva metodológica, la presencia del pasado en el presente se pone a jugar también en el análisis de los períodos subsiguientes. En efecto, el Frente Nacional tampoco es considerado como heredero exclusivo de la Violencia, según cánones establecidos. Es, por el contrario, si entiendo correctamente al autor, síntesis de República Liberal y de Violencia. Podría añadirse incluso que si bien el Frente Nacional había sido antídoto contra la violencia partidista, con su doble juego de reforma y represión, rápidamente comenzaría a ser percibido como causa de las nuevas violencias. Las guerrillas que surgen por doquier en los años sesenta se ven ciertamente favorecidas por el contexto internacional contestatario de Occidente y por los movimientos anticoloniales del Tercer Mundo, pero en nuestro caso, lo recuerda y argumenta Marco Palacios, hunden sus raíces en luchas agrarias y populares de las tres o cuatro décadas precedentes. Otro tanto podría decirse de los grupos paramilitares, grupos de autodefensa y la nueva oleada de pájaros que cobran notoriedad durante la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala: habían operado casi que sin solución de continuidad con sus pares de los años cincuenta e incluso, como se puso en evidencia más tarde, tenían amparo legal desde por lo me-

nos 1965. Finalmente, el narcotráfico de la segunda mitad de los setenta, respaldado por una tradición de ilegalidad montada en torno al contrabando, no haría más que reapropiarse de viejas estructuras paralelas, alternativas o contestatarias, y darles un firme soporte financiero.

A la larga, el Frente Nacional que había surgido como freno a la Violencia pudo ser visto como el gran promotor de las nuevas violencias. Una sombra de ilegitimidad empezó a recorrer todo el espectro político. La sensación de una enorme brecha entre las prácticas y las exigencias socioculturales de una nueva Colombia y la pereza de la política y de las instituciones frente a esas novedades, empezó a expresarse de múltiples formas. Desde entonces, para dar un solo ejemplo, expansión de la guerrilla y necesidad de una reforma institucional, comenzaron a ser términos indisolubles. Todos los gobiernos posteriores, desde Betancur, recibirían su caracterización fundamental por la "política de paz" que le ofrecieran al país. En esa secuencia aparecen el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), los nuevos espacios para las disidencias políticas a través de mecanismos como el de la elección popular de alcaldes, y finalmente la expedición de una Nueva Constitución, especie de "nuevo compromiso histórico" entre aperturismo económico y democratización institucional. En esos planes, casi siempre ha estado ausente o semiausente una política de seguridad ciudadana, que atienda los retos

que plantea la proliferación de las violencias que desde el trabajo de los "Violentólogos" se denominan "no negociables". Estaba presente, sí, pero de manera más bien funcional a los gobiernos de turno, la bandera de los Derechos Humanos, que sólo comenzó a izarse de verdad cuando espectadores y fiscales internacionales encontraron los foros y los mecanismos adecuados para imponer progresos mínimos pero visibles y controlables.

El comienzo del libro podría ser también el cierre del mismo y el cierre de la centuria. En efecto, al terminar el siglo XX -en esta travesía secular- Pa-

lacios se encuentra (nos encontramos) con una maraña de violencias no resueltas, con un Estado que no logra construir su legitimidad y con una inserción negativa del país en la arena mundial en la cual de repente nos descubrimos no como actores sino como reos o como parias. Eterno retorno, historia inmóvil, estaría un tentado a colegir. Es, en todo caso, la sensación que se tiene cada vez que uno mira un "antes" y un "después" de la historia colombiana, incluso de los períodos más críticos. Esto puede llevar, desde luego, a interpretaciones erróneas: cuando se profundiza en el

análisis se descubre, por el contrario, que el trayecto mismo entre punto de partida y punto de llegada está lleno de peripecias y es de un enorme dinamismo. Es precisamente lo que se capta y da sentido a esta obra, que bien hubiera podido titularse: *Un siglo de historia colombiana*. Es desde luego, un nuevo punto de partida para los jóvenes investigadores y como todo esfuerzo de reinterpretación histórica, una herramienta útil para poner en su justo lugar la crisis presente.

---

**GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ**

Director del Instituto de Estudios

Políticos y Relaciones Internacionales.